



Asamblea General

Distr. general
27 de enero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

Opinión núm. 57/2019, relativa a Lee Hak Su (República Popular Democrática de Corea)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 21 de mayo de 2019 al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea una comunicación relativa a Lee Hak Su. El Gobierno respondió a la comunicación el 7 de junio de 2019. La República Popular Democrática de Corea es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* De conformidad con el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, Seong-Phil Hong no participó en la aprobación de la presente opinión.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Lee Hak Su, de 40 años de edad, es un nacional de la República Popular Democrática de Corea que residía anteriormente en el condado de Taehongdan, provincia de Ryanggang.

5. La fuente informa de que el Sr. Lee dirigía el Departamento de Cambio de Divisas de la Universidad Kim Il-sung, situado en la Facultad de Ciencias Sociales. Su principal actividad eran las operaciones comerciales de importación y exportación de mercancías con China. En ese contexto, tenía acceso a grandes cantidades de moneda china, viajaba a China y se reunía con ciudadanos de ese país. La fuente afirma que en la República Popular Democrática de Corea está prohibido que los particulares realicen actividades empresariales, y que las actividades comerciales con países extranjeros se consideran actos de espionaje. Por lo tanto, el Sr. Lee era objeto de una vigilancia minuciosa del Departamento de Seguridad del Estado.

6. Según la información recibida, el 23 de enero de 2009 el Sr. Lee fue detenido en su domicilio por militares de la Oficina de Seguridad. La fuente sostiene que no se mostró al Sr. Lee ninguna orden judicial en el momento de su detención y que ni él ni su familia o sus abogados fueron informados de los motivos de su privación de libertad. A continuación, el Sr. Lee fue transferido a las dependencias de la Oficina de Seguridad, donde permaneció hasta septiembre de 2009, cuando fue trasladado al campo de reclusión de Yodok, donde se cree que se encuentra en la actualidad.

7. Según la fuente, siguen sin conocerse los cargos que pesan contra el Sr. Lee, ya que su juicio fue secreto. La fuente alega que el Sr. Lee fue probablemente acusado de varios delitos tipificados en el Código Penal, a saber, traición a la patria (art. 63), comercio ilegal de equipos y suministros en divisas (art. 107), actividad comercial ilícita en instituciones o en agencias u organizaciones comerciales con ingresos en divisas (art. 111) y cruce ilegal de fronteras (art. 221).

8. Además, la fuente sostiene que, en septiembre de 2009, unos militares de la Oficina de Seguridad se presentaron en el domicilio del Sr. Lee e indicaron que había sido transferido al campo de reclusión de Yodok. Según la fuente, los militares se llevaron consigo efectos personales del Sr. Lee como cucharas, palillos y platos para que los utilizara en el campo de prisioneros. Después de septiembre de 2009, los militares acudieron varias veces al domicilio del Sr. Lee y se llevaron libros sobre política que había recibido de la Universidad Kim Il-sung. La fuente considera que la posesión de dichos libros es probablemente el motivo por el que se sospecha al Sr. Lee de espionaje.

9. La fuente afirma que no se dispone de la mínima información sobre el Sr. Lee ni sobre su detención, juicio y condena. Hasta la fecha, los familiares u otros representantes del Sr. Lee no han recibido ninguna comunicación oficial de funcionarios del Estado. Su familia solo ha recibido información oficiosa de que se encuentra recluido en el campo de reclusión de Yodok y de que su situación es altamente confidencial. La fuente alega que los militares no han presentado pruebas de que el Sr. Lee haya estado involucrado en algún tipo de espionaje. La fuente desconoce si el Sr. Lee sigue con vida.

10. Según la fuente, no se ha podido determinar el fundamento jurídico de la detención del Sr. Lee. La fuente comunica que se detendría igualmente a toda persona que entablase una acción contra las autoridades para proteger los derechos de un preso político en la

República Popular Democrática de Corea, y explica que no existe ninguna vía oficial para presentar una denuncia en nombre de las víctimas de detención arbitraria. Las detenciones se realizan sin que se presenten las correspondientes órdenes, no se celebran juicios y tampoco hay procedimientos judiciales de recurso o de otro tipo para obtener reparación o gozar de garantías procesales. Si un familiar o un amigo de un detenido intenta buscarlo por medios oficiosos, sería inmediatamente castigado, recluido y declarado culpable y condenado por asociación. Si bien en la República Popular Democrática de Corea hay abogados, su labor es meramente formal.

11. Además, la fuente informa de que no existe ningún procedimiento de notificación oficial del traslado de una persona a un campo de reclusión. Por consiguiente, la alternativa oficiosa para obtener información sobre el paradero de un detenido consiste en recurrir a un funcionario del Departamento de Seguridad del Estado que facilitará información básica sobre la persona en cuestión a cambio de una costosa comida con bebidas. Sin embargo, después de haber facilitado información sobre el detenido, dichos funcionarios suelen advertir a los familiares de que serán perseguidos penalmente si intentan averiguar más al respecto. La fuente alega que ello hizo imposible proteger al Sr. Lee y realizar averiguaciones sobre su privación de libertad.

12. La fuente señala que la falta de garantías procesales respecto de los detenidos en campos de reclusión implica que no se establezca una duración determinada y que no haya posibilidad de recurso, por lo que la reclusión se prolonga de manera indefinida. Ya han pasado casi 11 años desde que el Sr. Lee fue detenido en enero de 2009, cuando tenía 29 años de edad.

Respuesta del Gobierno

13. El 21 de mayo de 2019 el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de conformidad con su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la situación actual del Sr. Lee, a más tardar el 22 de julio de 2019. El Grupo de Trabajo también solicitó al Gobierno que indicara qué disposiciones legales justificaban el mantenimiento de su privación de libertad, y su compatibilidad con las obligaciones de la República Popular Democrática de Corea en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que velase por la integridad física y mental del Sr. Lee.

14. El 7 de junio de 2019 el Gobierno presentó su respuesta. Afirma que, tras haber examinado la comunicación relativa al Sr. Lee, llegó a la conclusión de que el caso planteado no era aplicable a la República Popular Democrática de Corea. Además, el Gobierno señala que, como en casos anteriores, esas comunicaciones forman parte de un complot político estereotipado contra la República Popular Democrática de Corea por parte de fuerzas hostiles, que recurren a la retórica de los “derechos humanos” para atacar al país. Por lo tanto, una vez más, el Gobierno rechaza categóricamente el presente caso por enmarcarse en complot contra el país con fines políticos con el pretexto de defender los derechos humanos. El Gobierno recomendó al Grupo de Trabajo que tratase de vislumbrar el motivo oculto tras esas comunicaciones y que adoptase una actitud justa y crítica hacia los intentos malintencionados de las fuerzas hostiles de relacionar de manera imprudente a la República Popular Democrática de Corea con cualquier cuestión basándose en información falsa y conjeturas. La respuesta del Gobierno se comunicó a la fuente para que formulara comentarios adicionales.

Deliberaciones

15. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada.

16. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Lee es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las

alegaciones (A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no presentar argumentos que respondan directamente a las alegaciones de la fuente.

17. El Grupo de Trabajo lamenta la reiterada renuencia del Gobierno a colaborar de manera constructiva con él y a proporcionar una respuesta sustantiva a las comunicaciones recibidas con arreglo a su procedimiento ordinario¹. El Grupo de Trabajo no escatima esfuerzos para obtener información de los gobiernos en relación con cada caso. Sin embargo, cuando los gobiernos no responden o se limitan a descartar sin más las alegaciones formuladas, al Grupo de Trabajo no le queda más opción que examinar la comunicación de la fuente a la luz de toda la información de que dispone, de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo. En consecuencia, el Grupo de Trabajo ha tenido en cuenta las conclusiones de los mecanismos de derechos humanos pertinentes de las Naciones Unidas al examinar el presente caso.

18. A este respecto, el Grupo de Trabajo señala que, en su informe más reciente al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea declaró que seguía recibiendo informes sobre personas que habían sido acusadas de cometer delitos contra el Estado y que eran enviadas a campos de presos políticos, sin ninguna garantía jurídica o procesal, de un modo que equivalía a una desaparición forzada, sin que sus familias conocieran su paradero y con escasas o nulas posibilidades de reintegrarse a la sociedad. El miedo a ser enviado a un campo de presos políticos era muy real y estaba profundamente arraigado en la conciencia de los ciudadanos comunes. Aunque la República Popular Democrática de Corea seguía negando la existencia de esos campos, el Gobierno tenía la obligación, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, de dar respuesta a esas gravísimas denuncias (A/HRC/40/66, párr. 26)².

19. Además, en el último examen periódico universal de la República Popular Democrática de Corea, celebrado en mayo de 2019, los Estados formularon una serie de recomendaciones en relación con el cierre de los campos de presos políticos y se expresaron serias preocupaciones por la privación arbitraria de libertad de personas en esos campos (A/HRC/42/10, párrs. 127.25, 127.26, 127.29, 127.32, 127.33, 127.34 y 127.36 a 127.41).

20. La comisión de investigación sobre los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea formuló conclusiones similares en su informe de 2014 (A/HRC/25/63), en el que señaló que las personas a las que se consideraba implicadas en delitos políticos importantes “desaparecían” sin juicio ni orden judicial en campos de presos políticos (*kwanliso*). En ellos, eran recluidas en régimen de incomunicación. Las familias no eran informadas de su suerte, ni aun en el caso de que fallecieran. (párr. 59). La comisión de investigación recomendó a la República Popular Democrática de Corea que reconociera la existencia de violaciones de los derechos humanos, en particular los campos de presos políticos; facilitara a las organizaciones humanitarias internacionales y a los observadores de los derechos humanos acceso inmediato a los campos y a las víctimas supervivientes; cerrara todos los campos de presos políticos y pusiera en libertad a todas las personas recluidas en ellos; y aclarara con todo detalle el destino de las personas desaparecidas cuya pista no se pudiera seguir con facilidad (párr. 89 b)).

21. Por último, el Grupo de Trabajo recuerda que en su jurisprudencia hay abundante información sobre las alegaciones formuladas por la fuente. En los últimos años, el Grupo de Trabajo ha tenido ante sí hechos similares sobre los que concluyó que la detención en cuestión era arbitraria, entre otros los casos de detención sin orden judicial, desaparición forzada, reclusión en régimen de incomunicación, reclusión basada en delitos vagos, de

¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 52/2019, párr. 16; 54/2018, párr. 37; 80/2017, párr. 30; 29/2015, párr. 19; 36/2013, párr. 20; 35/2013, párr. 21; 34/2013, párr. 19; y 47/2012, párr. 10.

² Véase también A/74/275/Rev.1, párrs. 30 a 37 y 40, sobre la reclusión y la desaparición forzada en los campos de presos políticos, y la resolución 73/180 de la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, en la que la Asamblea General expresó su muy seria preocupación por la existencia de un extenso sistema de campos de presos políticos, e instó encarecidamente al Gobierno a que los cerrase de inmediato y dejase en libertad a todos los presos políticos.

carácter general e impreciso, y ausencia total de mecanismos judiciales para impugnar la legalidad de la detención o apelar contra una reclusión posiblemente indefinida en un campo de presos políticos en la República Popular Democrática de Corea³. Tras haber examinado toda esa información, el Grupo de Trabajo estima que la información proporcionada por la fuente es fidedigna.

22. En el presente caso, la fuente sostiene que el Sr. Lee fue detenido el 23 de enero de 2009 sin que mediara orden judicial ni se le expusieran las razones de su detención. El Gobierno no ha respondido a ninguna de estas alegaciones. Dado que el Gobierno no ha aducido ningún argumento en contra, el Grupo de Trabajo considera convincente la información proporcionada por la fuente.

23. El Grupo de Trabajo recuerda que, en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Además, en el artículo 9, párrafo 2, se establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma. En el presente caso, el Sr. Lee fue detenido sin que mediara orden judicial alguna, lo que constituye una vulneración del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Tal y como ya ha establecido el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención⁴. Además, el Sr. Lee no fue informado de las razones de su detención, lo que contraviene el artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

24. Por otro lado, de la información presentada por la fuente se desprende que, desde septiembre de 2009, el Sr. Lee ha permanecido recluido en régimen de incomunicación en el campo de reclusión de Yodok. El Gobierno no ha transmitido ninguna comunicación oficial a los familiares del Sr. Lee ni a sus representantes acerca de su situación, y solo se supo que había sido trasladado al campo de reclusión de Yodok cuando unos militares de la Oficina de Seguridad se presentaron en su domicilio en septiembre de 2009. La fuente informa de que su situación es “altamente confidencial”. Estos factores indican que el Sr. Lee no ha tenido ningún contacto con el mundo exterior, especialmente con sus familiares y abogados. El Gobierno no ha proporcionado ninguna explicación alternativa al respecto.

25. El Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente que la reclusión de personas en régimen de incomunicación vulnera su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto⁵. En este caso, la situación se agrava por el hecho de que, al parecer, no existen medios para impugnar la legalidad de la detención en la República Popular Democrática de Corea. El Grupo de Trabajo considera que el control judicial de la privación de libertad es una garantía fundamental de la libertad personal⁶ y resulta esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico. Dado que no hay ninguna indicación de que el Sr. Lee haya tenido la posibilidad de impugnar su detención, se vulneró su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Además, el mantenimiento del Sr. Lee en régimen de incomunicación lo sustrajo del amparo de la ley, lo que vulneró su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto.

26. Según la fuente, el Sr. Lee fue trasladado al campo de reclusión de Yodok en septiembre de 2009, pero no se dispone de información sobre si se presentaron cargos en su contra, si hubo actuaciones judiciales (la fuente indica que tuvo un “juicio secreto”), si fue declarado culpable de algún delito y, de ser así, qué pena se le impuso, o ni siquiera de si

³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 52/2019, 54/2018, 81/2017, 80/2017, 32/2015, 29/2015, 36/2013, 35/2013, 34/2013, 47/2012 y 4/2012.

⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 52/2019, 9/2019 y 46/2018.

⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 52/2019, 79/2017 y 45/2017.

⁶ Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 3.

sigue con vida. En resumen, no hay información que legitime la privación de libertad del Sr. Lee durante casi 11 años, lo que constituye una denegación de sus derechos reconocidos en los artículos 9 y 14 del Pacto.

27. El Grupo de Trabajo concluye que el Gobierno no adoptó las medidas necesarias para establecer el fundamento jurídico de la detención del Sr. Lee y que tampoco ha comunicado al Grupo de Trabajo información sobre el marco jurídico que justificaría su privación de libertad en el campo de reclusión de Yodok. Por consiguiente, la privación de libertad del Sr. Lee es arbitraria con arreglo a la categoría I.

28. Preocupa profundamente al Grupo de Trabajo que el Gobierno no haya proporcionado información sobre el Sr. Lee, en particular sobre su paradero y su situación actual. El Grupo de Trabajo ha decidido remitir el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y también lo remitirá al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.

29. El Grupo de Trabajo considera que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad que vulneren las normas fundamentales del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad. El presente caso hace necesario reiterar esa afirmación. La obligación de respetar las normas internacionales de derechos humanos, que son normas imperativas y *erga omnes*, como la prohibición de la detención arbitraria, incumbe a todos los órganos y representantes del Estado, así como a todas las personas⁷.

30. El Grupo de Trabajo celebraría la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno a fin de abordar sus preocupaciones relacionadas con la privación arbitraria de libertad, en el marco de una visita a la República Popular Democrática de Corea. El Grupo de Trabajo espera recibir una respuesta favorable a su última solicitud de visita al país, formulada el 17 de abril de 2015.

Decisión

31. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Lee Hak Su es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría I.

32. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Lee sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

33. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Lee inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

34. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Lee y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

35. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea para que tomen las medidas correspondientes.

36. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

⁷ Véase la opinión núm. 54/2018, párr. 57.

Procedimiento de seguimiento

37. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Lee y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Lee;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Lee y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Popular Democrática de Corea con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

38. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

39. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

40. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁸.

[Aprobada el 18 de noviembre de 2019]

⁸ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.